



Consejo de  
Transparencia y  
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

## RESOLUCIÓN

N/REF: RT/0351/2017 y RT/0352/2017

FECHA: 23 de octubre de 2017

**ASUNTO:** Resolución de Reclamaciones presentadas al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a las Reclamaciones números RT/0351/2017 y RT/0352/2017 presentadas por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

### I. ANTECEDENTES

1. Los hechos que han dado lugar a la presente Resolución pueden sistematizarse como sigue:
  - Por escrito registrado en la Subdelegación del Gobierno en Cuenca el 6 de junio de 2017, el ahora reclamante remitió una solicitud al Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid con relación a las historias clínicas informatizadas. El siguiente 12 de julio, recibe un escrito del Consejero de referencia en el que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG- se le solicita mayor concreción en la solicitud, indicando la aplicación o aplicaciones de historia clínica sobre las cuales desea que se le facilite información, o en su defecto el centro o centros sanitarios sobre los que versa la solicitud, concediéndole un plazo de 10 días para trasladar lo que considere oportuno, con los efectos previstos en el aludido artículo 19.2 de la LTAIBG en caso de no llevar a efecto dicha actuación.
  - Mediante escrito registrado el 18 de julio de 2017 en la ventanilla única del Ayuntamiento de Tarancón -Cuenca-, el ahora reclamante remite solicitud de información en la que se concreta que *la Historia Clínica informatizada sobre la cual solicito información, es la aplicación donde se anotan las sucesivas*

[ctbg@consejodetransparencia.es](mailto:ctbg@consejodetransparencia.es)



*asistencias sanitarias.* Añadiendo la identificación de 15 centros sanitarios de la Comunidad de Madrid respecto de los cuales desea obtener la información.

- Al no haber obtenido contestación a la solicitud de referencia, mediante escrito registrado en esta Institución el 22 de septiembre de 2017 interpone una reclamación al amparo del artículo 24 de la LTAIBG. A esta Reclamación se le asigna el número de referencia RT/0351/2017.
  - Mediante escrito de 25 de septiembre de 2017, por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo se dio traslado del expediente, por una parte, a la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano para conocimiento y, por otra parte, al Secretario General Técnico de la Consejería de sanidad de la Comunidad de Madrid a fin de que en el plazo de quince días hábiles formularan las alegaciones que estimasen por conveniente, aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que pudieran realizar.
2. En paralelo a lo acabado de describir el ahora reclamante planteó otra solicitud de acceso a la información cuyos antecedentes pueden resumirse de la siguiente manera:
- A través de un escrito registrado en el Ayuntamiento de Tarancón el 4 de julio de 2017, el ahora reclamante planteó una solicitud de información al Hospital Universitario de la Fundación Jiménez Díaz de la Comunidad de Madrid con relación a información sobre la historia clínica informatizada. Mediante un escrito de 28 de julio de 2017 de la responsable de Servicio de Información y atención al Paciente de la indicada Fundación, tras poner de manifiesto que su escrito había tenido entrada en esa fecha en la Fundación, se traslada al ahora reclamante que, “al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la solicitud de información que usted nos hace llegar debe dirigirse al órgano administrativo al que se encuentra vinculada la Fundación Jiménez Díaz, en este caso, esta entidad se trata del servicio Madrileño de Salud, institución a la que hemos dirigido sus observaciones”.
  - Con posterioridad, el ahora reclamante remite un correo electrónico el 19 de agosto de 2017 al Servicio al Paciente del Hospital Universitario en el que solicita si por parte de la Fundación se ha facilitado al Servicio Madrileño de Salud la información requerida. A través de la misma vía, el siguiente 22 de agosto se le comunica que el escrito originario fue trasladado al Servicio Madrileño de Salud el pasado 1 de agosto.
  - Al no recibir la información solicitada, a través de un escrito registrado en este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el 22 de septiembre de 2017, el interesado interpone una reclamación al amparo del artículo 24 de la LTAIBG. A esta Reclamación se le asigna el número de referencia RT/0352/2017.
  - Por escrito de 25 de septiembre de 2017, la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo trasladó el expediente, por una parte, a la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid para conocimiento y, por otra parte, al Secretario General Técnico de la Consejería de sanidad de la Comunidad de





Madrid a fin de que en el plazo de quince días hábiles formularan las alegaciones que estimasen por conveniente, aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que pudieran realizar.

3. Mediante escrito registrado en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el 20 de octubre de 2017 se trasladan las alegaciones elaboradas por la Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, Servicio Madrileño de Salud, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. en concreto se indica lo siguiente:
  - La Secretaría General Técnica de la Consejería de sanidad encuadra dos escritos remitidos por el ahora reclamante (RT/351/2017 y RT/352/2017) en el mismo expediente.
  - El 25/08/2017 se recibió en la Dirección General la solicitud de información nº Reg: 07-OPEN-00105.1/2017 del ahora reclamante a la que se incorporan los escritos enviados con anterioridad por el solicitante al Consejero de Sanidad y a la Fundación Jiménez Díaz, en los que solicita información referente a la historia clínica informática. La Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad procedió a la unificación de los escritos anteriormente indicados designando como órgano competente a la Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, dándole entrada como una única solicitud de transparencia Reg: 07-OPEN-00105.1/2017.
  - El 25/08/2017 se inició la tramitación del expediente 07-OPEN-00105.1/2017 y se envió la resolución al ahora reclamante por correo postal el 22 de septiembre de 2017, recibándose acuse de recibo el 25 de septiembre de 2017 según se acredita en el expediente con copia de certificados de correos.
  - El ahora reclamante presenta en registro los escritos de la reclamación el 22 de septiembre de 2017, recibiendo por tanto la resolución tres días después de haber interpuesto la reclamación.

## II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *"salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido*



en la disposición adicional cuarta de esta Ley". Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

*"1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).*

*2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias".*

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno) suscribieron el pasado 2 de noviembre de 2016 un *Convenio para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24* de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -BOE, n. 13, de 16 de enero de 2017- en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.

3. Precisadas las reglas sobre competencia orgánica para dictar esta Resolución, la primera cuestión en la que debemos detenernos es la acumulación de las Reclamaciones números RT/0351/2017 y RT/0352/2017. De acuerdo con los antecedentes que obran en el expediente, sumariamente reseñados en esta Resolución, el objeto de las mismas es idéntico -reivindicar el derecho de acceso a la información planteada con relación a información de historias clínicas-, pudiendo considerar cumplido el requisito material de la "identidad sustancial" entre ambas a que alude el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. Con carácter preliminar cabe formular una consideración de índole formal, relativa al cumplimiento de los plazos establecidos en la LTAIBG con relación a la presentación de una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

En este sentido, cabe recordar que el artículo 20.1 de la LTAIBG prevé, con relación a la resolución de las solicitudes de acceso a la información, lo siguiente,



*La resolución en la que se conceda o deniegue el derecho deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.*

Mientras que, por su parte, el artículo 24.2 de la LTAIBG dispone que

*La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.*

En el presente caso, de los antecedentes obrantes en el expediente se desprende que la fecha en la que tiene entrada las solicitudes de acceso a la información en el registro del órgano competente para conocer de las mismas -Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria- es el 25 de agosto de 2017, disponiendo de un mes, hasta el 25 de septiembre de 2017 para dictar y notificar la resolución de referencia. De este modo, tal y como se ha acreditado por la administración autonómica, esta tarea se cumplió mediante Resolución de 22 de septiembre de 2017, notificada mediante acuse de recibo del día 25 de septiembre de 2017, mientras que el interesado plantea la reclamación ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante registrado el 22 de septiembre de 2017, esto es, sin haber concluido el plazo de un mes del que dispone el órgano competente para resolver..

El artículo 29 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece la obligación de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas y de los interesados de cumplir los términos y plazos establecidos por las leyes para la tramitación de los asuntos.

Asimismo, el artículo 30 de la indicada Ley 39/2015, de 1 de octubre, prevé que los plazos en meses se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Añadiendo que si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Asimismo, cabe advertir, que el cómputo del plazo señalado en meses o años ha sido interpretado por la jurisprudencia en el sentido de que concluye el día correlativo al de la notificación, publicación, estimación o desestimación en el mes que corresponda.

En conclusión, en atención a todo lo expuesto, procede declarar la inadmisión a trámite de la reclamación por incumplimiento de los plazos establecidos en la norma para su presentación.



### III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **INADMITIR** por extemporánea la Reclamación presentada, por [REDACTED].

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL  
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO  
Esther Arizmendi Gutiérrez

